

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Simón Guzmán.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia. México Julio 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

RECTIFICACION.

Se rectifica la votacion á que se refiere la comunicacion que se inserta.

En la entrega 120, tomo 4º, página 454 del Semanario Judicial, se lee, que la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia en el amparo promovido por D. Ramon O. Feliú, negó á este el amparo por unanimidad de votos; y como fué negado por mayoría, la misma Suprema Corte ha dispuesto se dirija á V. el presente, á fin de que se sirva hacer la debida aclaracion.

Independencia y Libertad. México, Diciembre 17 de 1873.—*Enrique Landa*, secretario.

C. Director del Semanario Judicial de la Federacion.—Presente.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos, por el C. Lic. Agustín Rodríguez, en representacion del Señor D. José Ros y Prats, contra la Gefatura de Hacienda de ese Estado, por violacion de garantías.

PRIMER PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL, DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE MEXICO.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Licen-

ciado Agustín Rodríguez, en representacion del C. José Ros y Prats, se ha presentado al Juzgado interponiendo recurso de amparo, quejándose, de que el C. Ministro de Hacienda ha dictado la resolucion que contiene el oficio de fojas 17, violando en su persona las garantías que le concede la Constitucion en sus artículos 14, 16 y 27. Como el escrito concluye pidiendo la suspension del acto reclamado, puede el Juzgado pedir á la autoridad el informe respectivo, y á su vez promoverá lo que corresponda.

México, Febrero 6 de 1873.—*Herrera Campos.*

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Licenciado Agustín Rodríguez, en representacion del C. José Ros y Prats, interpuso el presente recurso de amparo, contra la determinacion del C. Ministro de Hacienda contenida en el oficio de fojas 17, que declara nulos los derechos adquiridos por el último á la propiedad de una casa llamada "De Huerta" situada en la plaza principal del Distrito de Yautepec, y fué comprada á la Gefatura de Hacienda del Estado de Morelos, quien la enagenó de orden del expresado C. Ministro de Hacienda, considerándose la finca, como perteneciente al Erario Nacional, concluyendo con pedir la suspension del acto reclamado, por violarse en su persona las garantías que concede la Constitucion en sus artículos 14, 16 y 27: el primero, por que el Gobierno resuelve cuestiones que solo puede decidir el poder judicial, pues su poniendo buenos los derechos de la Señora Huerta, quien cedió la finca al Erario en pago de un capital que debía al Gobierno enagenada la casa en cuestion por el Ejecutivo, y adquiridos derechos por el quejoso, surgiría un juicio de preferencia de derechos. El artículo 16, porque no se le m

lesta por autoridad competente, no siéndola en el caso el C. Ministro de Hacienda; y el 27, porque la expropiación que se decreta no es con los requisitos y circunstancias del artículo. Habiéndose pedido la suspensión del acto reclamado, se solicitó del C. Ministro el informe respectivo, y lo evacuó insertando el informe de la mesa cuarta de la Sección sexta, aduciendo las razones que tuvo para declarar nula la enagenación de la finca, hecha al quejoso.

Como el informe aunque comprende el punto de la suspensión, pues entra de lleno á examinar si procede, llamando la atención del Juzgado sobre que no es competente para conocer del recurso de amparo, debe previamente resolverse la declinatoria de jurisdicción.

Conforme á la ley de amparo, la autoridad no es parte, y solo tiene derecho de informar con justificación; mas debiendo tomarse en consideración su indicación por ser de buena fe, y llevada del espíritu de que se obsequien las leyes, parece conveniente el que el Juzgado evite se diga de nulidad de sus procedimientos. En el presente juicio, tratándose de una providencia de suspensión, podría tener lugar el exámen del acto reclamado, desde el momento que se hace constar ha sido mandado ejecutar, y tanto mas, cuanto el amparo tiene por objeto asegurar las garantías que la Constitución otorga al hombre, contra la autoridad que las viola.

El texto del artículo tercero de la ley de amparo, podría comprender el caso de dos autoridades de un mismo lugar; pero como mas bien sus palabras se concretan á la ejecutora, y no contravieniéndose la Constitución sino obsequiándose, debe estar el Juzgado al texto de la ley y puede declarar, que el competente es el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, á quien remitirá las actuaciones.

México, Febrero 12 de 1873.

Otro si pide: mande se reponga el papel

por el del sello correspondiente. Fecha ut supra.—*Herrera Campos.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal del
Juzgado de Distrito del Estado
de Morelos.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en 3 de Setiembre de 1870, la gefatura de hacienda del Estado sacó á remate la finca ubicada en la plaza principal de Yautepéc, conocida con la denominación de "Casa de Huerta" y valuada en la cantidad de tres mil doscientos cincuenta y seis pesos, seis centavos \$3.256,06 y admitiendo como buena la postura que por las dos terceras partes de ese valúo hizo el C. Rafael Vidal, la adjudicó á su favor, librando las órdenes respectivas para que se otorgara ante el Juzgado de primera instancia de aquel Distrito la correspondiente escritura, que quedó extendida el 8 de Noviembre.

El C. Vidal como dueño de esa casa, la vendió en 28 de Diciembre de 1871 á D. José Ros y Prats, que concluyó de hacer el pago en las oficinas de hacienda, del precio de la adjudicación.

En 18 de Enero de 1872 el C. Presidente de la República declaró nulo el remate hecho por la gefatura de hacienda, porque la Federación solo tenía en la casa un capital y réditos, y por haberse variado las bases de la ley de 10 de Diciembre de 1869; y en 4 de Mayo del mismo año se dijo al C. Gobernador del Estado, para que lo hiciera llegar á noticia del Ayuntamiento de Yautepéc, que no habiendo pruebas bastantes para acreditar la cesión que D. José Ros y Prats asegura hizo D. Ramon Huerta en favor del Erario Nacional en pago del capital de dos mil pesos que reconocía la casa, y siendo irregular el remate por las circunstancias ya expresadas, y en atención á que era justo que al obtener el

Ayuntamiento de Yautepec los derechos del fisco, reportara tambien la obligacion que este tenia para devolver al C. Vidal, ó al Sr. Ros y Prats las especies que justificasen haber enterado por causa del remate, dejando á salvo los derechos de este Señor para deducir contra quien corresponda el valor de las mejoras hechas en la finca; el C. Presidente se habia servido acordar, primero: que se declaraba nulo el remate; segundo: que se hiciera cesion al Ayuntamiento de Yautepec del capital de dos mil pesos y sus r ditos, que sobre la casa tiene el Erario Nacional, á fin de que arreglara con la interesada la manera de derribar esa finca para ensanchar y hermosar la plaza de aquella Ciudad, siempre que la Corporacion se hiciera cargo de reintegrar á Vidal ó á su sucesor las especies que justifiquen haber entregado por la operacion de remate, y tercero: que quedaban á salvo los derechos de este  ltimo por razon de las mejoras hechas en la finca, para deducirlos contra quien corresponda.

El Sr. Ros y Prats gestion  ante el Ministerio; y como resultado de su ocursio fecha 17 de Mayo, en 28 de Enero del presente a o se le comunic  el acuerdo, en que con esa fecha determin  el C. Presidente, primero: que permanecia en su vigor la resolucio sobre lo principal de este negocio, dada en 4 de Mayo anterior; segundo: que se diera en consecuencia posesio de la casa   la Sra. Huerta, dejando   salvo los derechos del Sr. Ros y Prats por las mejoras, y tercero: que as  como no debia hacerse cargo   la Se ora de los r ditos al seis por ciento sobre el capital que reconoce la casa desde el 1  de Enero de 1861, se le abonaran tambien las rentas que dej  de percibir durante el tiempo que por el remate estuvo privada de la finca, computando esas rentas por el estado que guardaba en aquella  poca.

Con fecha 6 del que cursa, el C. Lic. Agust n Rodr guez present  escrito de queja al Juzgado primero de Distrito de la Ca-

pital de la Rep blica, pidiendo que se amparase   D. Jos  Ros y Prats su poderdante, en el goce de las garant as que otorgan los art culos 14, 16 y 27 de la Constitucion, que dice fueron violadas con la resolucio de 28 de Enero, y solicitando tambien, que desde luego se mandasen suspender los procedimientos consiguientes.

Pedido al Ministerio de Hacienda el informe prevenido por el art culo quinto de la ley org nica de 20 de Enero de 1869, contest  diciendo: que por ser la gefatura de hacienda del Estado la autoridad encargada de ejecutar el acto reclamado, este Juzgado era el  nico competente para conocer del recurso; y solo por deferencia al C. Juez primero de Distrito de la Capital, se le transcribian por v a de informe, el Supremo acuerdo de 18 de Enero y la comunicacion dirigida al C. Gobernador del Estado en 4 de Mayo, haci ndole presente, que por el mero hecho de no haberse aprobado el remate de la finca, no pudo adquirir posesio de esta el postor, puesto que hasta la aprobacion de este es cuando debe surtir todos sus efectos.

Se remiti  el expediente   este Juzgado; el d a 17 present  el C. Lic. Rodr guez nuevo escrito, diciendo que el Administrador de rentas de Yautepec, comisionado por la gefatura, habia intimado   la hija de su poderdante, que desocupara la casa en el t rmino de una noche, y reiterando en consecuencia su peticio respectiva   que se mandara suspender el acto reclamado, se decret  la suspensio; y evacuado por la gefatura de hacienda el informe con justificacion en que se limit    transcribir los supremos acuerdos de que ya se hizo m rito; y   manifestar que el expediente original est  en el Ministerio de Hacienda, se mandaron pasar los autos al que suscribe, conforme al art culo 9 de la ley org nica citada.

El quejoso hace valer en su escrito de fojas 18, que la casa de que nos ocupamos reconoc  como grav men hipotecario, un capital de dos mil pesos   la cofrad a de

Animas de la parroquia de Yantepec; y no pudiendo su dueño hacer en tiempo la redención de ese capital, ofreció en pago la misma casa; que la sub-agencia de bienes nacionalizados establecida en esta Ciudad en la época del Imperio, admitió la cesión en pago, que aprobó la Dirección General; y considerada la finca como del dominio nacional, la gefatura de hacienda del Estado continuó en posesión de ella destinándola á diferentes usos del servicio público, hasta que sin oposicion del antiguo dueño la sacó á remate en 1870.

Pero si bien de las constancias de estos autos aparece que la casa reconocía un capital de \$2000 que entró al Erario Nacional conforme á la ley de 13 de Julio de 1859, no existe dato alguno de su vencimiento, de la cesión en pago, ni del uso que de la casa haya hecho la Gefatura con anterioridad al remate.

Ligadas intimamente las garantías que invoca el Sr. Ros y Pratz, la cuestion sometida al Juzgado y materia del presente recurso, está reducida á investigar si la declaracion de nulidad del remate verificado por la Gefatura de Hacienda, es un acto meramente administrativo, ó si por ser necesaria la resolucion de derechos adquiridos y la aplicacion de la ley á pretensiones contrarias, era esa resolucion propia de las atribuciones del poder judicial.

En efecto; si el Ejecutivo obró en la órbita de sus facultades, no habría la violacion de la garantía que otorga el artículo 14, porque el Gobierno no se había ingerido en las atribuciones de los Tribunales; tampoco había infringido la prohibicion del artículo 16 porque sería la autoridad competente para inferir al quejoso la molestia que dice sufrir en sus posesiones; y no teniendo derechos á la propiedad, ni puede quejarse de expropiacion ni exigir los requisitos que para ella establece el artículo 27 de la Constitucion.

La única razon aducida para justificar el acto reclamado, consiste, como se ha ex-

presado, en que el remate no debe surtir sus efectos sin la aprobacion superior, ni pudo sin esa condicion adquirir el postor la posesion de la finca. El artículo 133 del Reglamento de la Tesorería general de 20 de Julio de 1881, mandado observar por el artículo cuarenta y siete del Reglamento de Gefaturas de hacienda vigente, previene: "Trascurrido el término legal, pasarán los comisarios ó subcomisarios el expediente, con su respectivo informe, al Supremo Gobierno, sin cuya aprobacion no podrá llevarse á efecto la compra, venta ó contrato. El artículo 45 del mismo Reglamento de las Gefaturas de Hacienda, ordena que éstas den cuenta á la secretaría del ramo, con la liquidacion y todos los documentos originales, para su exámen y aprobacion, sin cuyo requisito no podrán determinar que se otorgue la escritura de propiedad en favor de los interesados..

Sin embargo, ese Reglamento se expidió en 15 de Julio de 1871, y el remate de la casa de Huerta se verificó el 3 de Setiembre de 1870, por lo que tal vez no se observaron esas prescripciones, como tampoco se han llenado los requisitos que establece en muchas de las adjudicaciones y remates de los bienes nacionalizados, no obstante que "la aprobacion del gobierno en los remates de los bienes que pertenecen al Erario federal, ha sido un principio reconocido por la administracion." (Lares, Lecciones de Derecho Administrativo, página sesenta y ocho.)

Pero es un hecho indudable en el caso de que nos ocupamos, que la gefatura de hacienda mandó extender la escritura de propiedad, en favor del C. Vidal, y otorgada que fué, tomó la posesion de la casa, siendo de advertir que el último artículo citado agrega en su parte final: "Los gefes de hacienda serán responsables de las operaciones que practiquen sin la aprobacion suprema," pero no declara nulas esas operaciones. (Reglamento de las Gefaturas de Hacienda, artículo 45.)

Acreditada para el Sr. Ros y Prats la propiedad de Vidal, por su escritura y por la posesion, la buena fé de su adquisicion es tanto mas presumible, cuanto que por el mero hecho de existir esa escritura que obra á fojas tres y siguientes, se entendian cumplidos los requisitos legales, inclusa la aprobacion superior.

Ahora bien, el acuerdo superior de 18 de Enero de 1872, resolvió que el remate era nulo porque la federacion solo tenia en la casa un capital y réditos, y porque en él se variaron las bases establecidas por la ley de 10 de Diciembre de 1869.

El artículo primero de este decreto establece efectivamente, que para la adjudicacion de las fincas y capitales *pertenecientes á la nacionalizacion*, el importe total y réditos ó el valor de la finca, se dividirá en tres partes que se cubrirán en las especies que menciona, debiendo calificarse las posturas segun la fraccion segunda, por el aumento que sobre valor se ofresca en numenario; y el remate á que nos referimos, se fincó en una postura de las dos terceras del valúo, y que por consiguiente, no llegaba al minimum establecido por esa ley. Pero si se admite que la adjudicacion debió hacerse conforme á ese decreto, sería necesario considerar la finca como nacionalizada, y por tanto, como perteneciente al erario; y si la federacion la adquirió en virtud de un contrato ó por otro medio legal, no eran de observarse en su remate las bases mencionadas.

Debemos, pues, considerar la primera razon de nulidad, que en mi concepto establece el carácter del acto reclamado. En la comunicacion de 4 de Mayo, se expresa: que no habiendo pruebas bastantes para acreditar la cesion, que segun el Sr. Ros y Prat hizo D. Ramon Huerta en favor del erario, etc., y esta consideracion manifiesta, que el gobierno despues de apreciar las pruebas aducidas en apoyo del derecho de propiedad de la Nacion, resolvió que la casa en cuestion era de propiedad particular, y

que carecia, por consiguiente, de facultad para venderla.

El artículo veintitres del reglamento de 5 de Febrero de 1861, dice: "Siempre que hubiere disputa entre dos ó mas denunciante, ó entre un denunciante y un adjudicatario, rematante ó comprador convencional, sobre derecho de preferencia, y en general, en todo caso de duda sobre el derecho de propiedad de bienes nacionalizados, se decidirá la cuestion por los tribunales, con arreglo á las leyes;" y el veinticuatro agrega: "Las cantidades que hubiere recibido el gobierno por redenciones ó pago de alcabala, y que no le correspondan por no haberse declarado válido el título en cuya virtud se hayan enterado, serán devueltas de toda preferencia en los mismos términos en que se hayan percibido."

Conforme á esta disposicion, la facultad de decidir en el caso de duda ó controversia sobre el derecho de propiedad de bienes nacionalizados, estaba reservada á los tribunales; pero si la "Casa de Huerta" vino al dominio nacional en virtud de una cesion en pago equiparable á la compra, ó por otro medio distinto que la nacionalizacion decretada por la ley de 13 de Julio de 1859, es mi opinion, que tampoco competía al Gobierno decidir sobre su propiedad. Esa competencia, la facultad de decidir, debería entenderse en ambos extremos, es decir, el Gobierno podria tanto resolver que la finca pertenecia al Erario Nacional, como reconocer sobre ella el derecho de propiedad del particular que la reclamara; y en el primer caso, su decision importaria la pérdida si era inapelable, de los derechos del particular reclamante, y esa pérdida tendria el carácter de una sentencia ó de una condenacion; importaria la ventilacion de esos derechos, propia solo de un juicio, y la resolucion de una controversia en que es parte la Federacion. (Constitucion, art. 97, fraccion 3ª)

En el segundo caso, el reconocimiento no podria verificarlo sino desprendiéndose de sus propios derechos, y no podria tener lu-

gar ese desprendimiento, si con anterioridad los habia transferido. Por otra parte; ¿era un derecho adquirido por Vidal ó por su sucesor Ros y Prats, ó solo *interés* como se llama en el lenguaje administrativo, el que afectaba de resolución de 28 de Enero? Verificado el remate, otorgada la escritura de adjudicacion y la de venta posterior, cubierto el precio en su totalidad, y existiendo la tenencia material por mas de un año y un día de parte de Ros y Prats, y anterior por la de Vidal y de la Gefatura, si el Erario hubiese tenido el dominio de la finca y facultad por consiguiente para transmitirlo, Ros y Prats estaria legitimamente subrogado en esos derechos, aun cuando la venta verificada en el remate fuese rescindible en virtud de los privilegios fiscales.

No llevada á efecto la venta, y pendiente de la aprobacion superior, solo tendria *interés* el rematador; pero consumada, aunque con infraccion de ese requisito de cuya observancia no tenia conocimiento el comprador, existe un derecho adquirido contencioso por sí mismo, y sujeto por consiguiente á los Tribunales. Y en la controversia de los derechos en pugna de la Señora Urueta de Huerta y del Señor Ros y Prats, era competente solo el poder judicial, y la Administracion careceria aun de un interés directo superior al de los contrincantes.

Por el acuerdo de 28 de Enero del presente año se previno tambien que se diese posesion de la casa por la Gefatura de Hacienda, á la S^a Urueta de Huerta y que se hiciera seccion al Ayuntamiento de Yautepec del capital, siempre que se hiciera cargo de reintegrar á Vidal ó á su sucesor, las especies que justifiquen haber enterado por razon del remate, y ademas de que en esa resolucion no se procura el reintegro de preferencia de los valores pagados al Gobierno por la operacion nulificada, devolucion preferente que recomienda el artículo 24 del reglamento de 5 de Febrero, ataca el derecho de posesion del Sr. Ros y Prats, que en mi concepto es claro ó incuestiona-

ble, y destruye como se expresa en el escrito de queja, la única garantia del reintegro del valor de las mejoras, consistente en la facultad de retener la finca. La cuestion que hemos examinado, como todas las que tienen el mismo caracter, es de difícil resolucion á mi entender, por no estar establecido definitivamente ni fijado aun entre nosotros el derecho administrativo. Sin embargo, de las razones expuestas se deduce: que la resolución sobre si la finca pertenecia ó no al Erario Nacional, está reservada y es propia de los Tribunales á quienes competia tambien la declaracion de nulidad del remate por la sola consideracion de que el Erario no tenga derecho de dominio sobre la finca, ó carezca de la facultad para venderla. En ese concepto, la resolucion de 28 de Enero reclamada por el Sr. Ros y Prats, infringió la prescripcion del artículo 14 de la Constitucion, porque lo juzgó en sus derechos y lo sentenció á devolver la casa, lo que corresponde al poder Judicial; vulneró la garantia del artículo 16 porque le molestaba en sus posesiones resolviendo sobre sus derechos, sin que sea la autoridad competente al efecto; y violó la garantia tambien que sanciona el artículo 27 del mismo Código, porque le priva de sus derechos, en mi concepto adquiridos á la propiedad de la finca, de sus derechos indudables respecto á la posesion, y del consistente en la facultad de retener por razon de las mejoras, sin que se le haya oido ni vencido en juicio, sin su consentimiento y sin los requisitos del artículo. Por todo lo que, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitucion, el Promotor fiscal pide se conceda el amparo solicitado en los términos del escrito de queja. Otrosí digo, que se prevenga al interesado reponga con el papel sellado correspondiente las fojas que ocupa este pedimento.

Cuernavaca, Febrero 24 de 1873.—*Nicolás Medina.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, Mar.

zo 11 de 1873 — *José Anastasio Rego*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Marzo 10 de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por el C. Lic. Agustín Rodríguez, en representación de D. José Ros y Prats, vecino de Yautepec, contra la gefatura de Hacienda del Estado como autoridad ejecutora de los acuerdos del Ejecutivo de la Unión de 4 de Mayo y 28 de Enero últimos, por los que entre otras cosas se declaró nulo el remate que la misma gefatura de hacienda hizo en 3 de Setiembre de 1870, de la casa llamada de "Huerta" situada en la plaza principal de Yautepec, y se mandó que por la propia gefatura se pusiese á la Señora Huerta en posesión de la misma casa, dejando á salvo los derechos del Sr. Ros y Prats, para deducirlos contra quien correspondiese por las mejoras que decía haber hecho en la finca: visto el informe de la autoridad ejecutora consistente en dos copias certificadas de los mencionados acuerdos; lo alegado por el Promotor Fiscal y todo cuanto de autos se tuvo presente y ver convino:

Resultando: que en 3 de Setiembre de 1870, la gefatura de hacienda, sin oposición alguna de la Señora Huerta ni de cualquiera otra persona, remató la enunciada finca en favor del C. Rafael Vidal, por las dos terceras partes de su valor importantes la suma de \$2.179,38, á consecuencia de cuyo remate se le otorgó la escritura respectiva en 8 de Noviembre del mismo año, constante en autos á fojas 3, 4, 5 y 6.

Resultando: que así las cosas y estando de hecho el rematante en posesión de la finca, vendió esta al quejoso en 28 de Diciembre del siguiente año, según consta de la escritura de fojas 7 á 10 de este expediente, por cuya venta el mismo quejoso entró en posesión de la repetida finca, sin que

nadie se la contradijera, y estuvo en ella hasta el 28 de Enero del corriente año, en que se le comunicó el acuerdo de la misma fecha.

Considerando: que al proceder la gefatura de hacienda al remate de la casa llamada de "Huerta" que fincó en el C. Vidal, estaba en posesión de la misma, según se deduce necesariamente del hecho mismo del remate, de la ninguna oposición de la que ahora se llama propietaria (acercá de lo cual no hay constancia alguna en este expediente en sentido contrario) y de la existencia en la misma gefatura de los datos suficientes sobre la propiedad nacional de la finca, pues de otro modo era verdaderamente imposible que hubiese sacado esta á remate, si no es en el caso de que procediera arbitrariamente, poniendo en almoneda pública la finca ó fincas que mejor le agradasen de cualquier C. cuya gratutia y desfavorable suposición para el Gobierno de la Unión ó de sus agentes, no es de hacerse, sino antes bien la de que en todo caso obra con entera justificación.

Considerando: que al otorgarse la escritura de remate á favor del C. Vidal, que procedía de buena fé, estaba el mismo en su derecho de creer que había precedido la aprobación de aquel, requerida por la ley, y de que se habían cumplido todos los requisitos previos al otorgamiento de dicha escritura, por lo que pudo muy bien celebrar contrato de venta de la finca rematada con D. José Ros y Prats; que enteró en la gefatura de hacienda y en la Tesorería General de la Nación, si no todo una gran parte del precio del remate, de donde resulta que si hubo irregularidades en la operación, estas son de la exclusiva responsabilidad de la misma gefatura, que practicó aquella contraviniendo á las disposiciones legales, en la parte que á la misma oficina tocaba únicamente cumplir, cuyas irregularidades en consecuencia, no pueden perjudicar al que remató la finca en cuestión, ni mucho menos á un tercero como el Sr. Ros y Prats, que ninguna

ingerencia tuvo en el acto del remate, ni despues, sino fué la de pago de una parte del precio de aquel, cuyo precio no devolvió el Gobierno Nacional como debió hacerlo, si el remate no se aprobaba aún.

Considerando: que si como se dice en el acuerdo de 4 Mayo, no habia constancias en el Gobierno de que la finca hubiera sido cedida en pago de los \$2.000 que antes reconocia, por la Señora Huerta que ahora la reclama, el Ejecutivo de la Union no pudo aprobar ni reprobar el remate por esa causa, sino consignar el caso á la resolucion de los tribunales, con tanta mayor razon, cuanto que la escritura de remate se habia otorgado, y el asunto no se referia ya exclusivamente al tiempo del acuerdo al Gobierno Federal y á la Sra. Huerta, ó á aquel y al rematante, sino á un tercero que tenia derechos legítimamente adquiridos, y que sostenia haber sido del fisco la relacionada finca, cuya cuestion exigia necesariamente una relacion que no era de la competencia de la autoridad administrativa, sino de la judicial, por tratarse de un punto dudoso sobre la propiedad de la casa, previsto por la parte final del artículo 23 del Reglamento de 5 de Febrero de 1861; de donde se infiere, que siendo esa la razon capital de la nulidad declarada del remate, el Ejecutivo de la Union violó la garantía consignada en el artículo catorce de la Constitucion de la República.

Considerando: que con la ejecucion del acuerdo que previene que por la Gefatura de Hacienda se ponga en posesion de la finca á la Sra. Huerta, se priva de la que legalmente tiene adquirida el quejoso en aquella sin ser antes oido y vencido en juicio, de donde resultan igualmente vulnerados el derecho de retencion de la finca por las mejoras necesarias en ella invertidas, concedido por el art. 939 del Código Civil, y el 16 de la Constitucion General de la República, pues el Ejecutivo de la Union no es autoridad competente para lanzar de su posesion al Sr. Ros y Prats.

TOMO IV.—PARTE II.

Considerando: que con los acuerdos contra que se intentó este recurso de amparo no se ha violado el art. 27 de la misma Constitucion, por lo que respecto de él no procede dicho recurso.

Por lo expuesto y lo alegado por el Ministerio fiscal en su pedimento de 24 de Febrero último, con fundamento de los artículos 2 de la ley de 20 de Enero de 1869 y 102 de la Constitucion federal, debia de declarar y declaro: la Justicia de la Union ampara y protege á D. José Ros y Prats contra la Gefatura de Hacienda del Estado, como autoridad ejecutora de los acuerdos de 4 de Mayo y 28 de Enero últimos del C. Presidente de la República, extractados en esta sentencia, por violarse con ellos las garantías otorgadas al hombre en los arts. 14 y 16 del Pacto federativo. Hágase saber al interesado y al Promotor fiscal, previniendo al primero, que en el acto de la notificacion, reponga con el papel del sello correspondiente el del quinto que se ha invertido en este juicio y el valor del último suplido por este Juzgado. Remítase original este expediente á la Suprema Corte para su revision, sacándose previamente copias de esta sentencia para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, Diario Oficial del Supremo Gobierno de la República y periódico Oficial del Estado. Así definitivamente juzgando, lo mandó y firmó el C. Lic. Manuel M. Rendon, Juez 2º suplente de Distrito de que doy fé.—*Manuel M. Rendon.*—*José Anastasio Rego*, secretario.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Marzo 11 de 1873.—*José Anastasio Rego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 5 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por el C. Lic.

Agustín Rodríguez en representación de D. José Ros y Prats, vecino de Yautepec, contra la gefatura de Hacienda del Estado, como autoridad ejecutora de los acuerdos del Ejecutivo de la Unión de 4 de Mayo y 28 de Enero últimos, por los que entre otras cosas se declaró nulo el remate que la misma gefatura de Hacienda libró en 3 de Setiembre de 1870, de la casa llamada de "Huerta", sita en la plaza principal de Yautepec; y considerando: que la gefatura de Hacienda del Estado de Morelos, previos los requisitos de la ley, remató en 3 de Setiembre de 1870 la finca enunciada, sin que hubiera oposicion por parte de la Sra. Huerta ni de otra persona; que el remate fincó en el C. Rafael Vidal, otorgándose la correspondiente escritura en 8 de Noviembre del mismo año; que estando en posesion de la finca rematada el C. Vidal, vendió al peticionario la casa, por escritura de 28 de Diciembre del siguiente año, en virtud de cuyo título entró en posesion de la referida finca, sin que nadie se la contradijera, hasta comunicarsele la orden que há motivado el presente recurso. Considerando: que los derechos que tiene el quejoso adquiridos en virtud del remate efectuado por la gefatura, que han servido de títulos primordiales para el contrato de compra y venta efectuado con el C. Rafael Vidal, no pueden ya ser efecto de una decision administrativa; que si la Sra. Huerta tiene algunos que deducir para probar su propiedad en la mencionada finca, debe ocurrir á los Tribunales en la via y forma prescrita por las leyes: los acuerdos del Ejecutivo de 4 de Mayo y 28 de Enero de 1873, importan una violacion expresa de las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 del pacto fundamental de la República, por cuyos fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito del Estado de Morelos que dice: La justicia de la Unión ampara y protege á D. José Ros y Prats contra la gefatura de Hacienda del Estado,

como autoridad ejecutora de los acuerdos de 4 de Mayo y 28 de Enero últimos del C. Presidente de la República, extractados en ésta sentencia, por violarse con ellos las garantías otorgadas al hombre en los artículos 14 y 16 del Pacto federativo. Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca. Asi por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José M. Iglesias—Juan J. de la Garza—José M. Lozano—José Arteaga.—Pedro Ordaz—Ignacio Ramirez—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—José Garcia Ramirez.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor. Es copia que certifico. México, Julio 12 de 1873. Lic. Enrique Landa, oficial mayor

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por Gil Melendres, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: no siendo, en concepto del que suscribe, bastantes las pruebas rendidas por el quejoso Melendres para justificar que á la fuerza fué obligado á prestar sus servicios en el batallon núm. 7 del que fué refundido al núm. 22, tanto porque los testigos presentados son enteramente desconocidos como porque en realidad no dan la razon de sus dichos, y despues de asegurar que hace muchos años que conocen á Melendres y que les consta su oposicion á servir en el ejército, dicen que igno-